BOLETIN DE NOTICIAS COMITÉ MONS. OSCAR ROMERO DE MADRID

Argumosa, 1-6°-B 28012-Madrid. Tfno.: 91.539.87.59 Email:cmromero@nodo50.org

El Comité Mons. Oscar Romero de Madrid no se responsabiliza necesariamente de las opiniones presentadas en este Boletín. Señalamos las fuentes de donde han sido extraídas. En caso de que no desee seguir recibiendo nuestro Boletín, por favor, comuníquenoslo por medio de un correo electrónico a la dirección más arriba señalada.

BOLETÍN NÚMERO 256 FECHA: 6 de Febre		o de 2017
SUMARIO		
PAÍS	CONTENIDO	№ PÁG.
AMÉRICA LATINA	DECLARACIÓN DE SANTO DOMINGO DEL ENCUENTRO DE MOVIMIENTOS SOCIALES Y FUERZAS POLÍTICAS "POR LA PAZ, LA UNIDAD Y LA INTEGRACIÓN DE NUESTRA AMÉRICA"	
BOLIVIA	EVO 2019, LAS BATALLAS PENDIENTES DEL PROCESO DE CAMBIO BOLIVIANO	3
COLOMBIA	17 LÍDERES SOCIALES FUERON ASESINADOS EN LOS DOS ÚLTIMOS MESES EN COLOMBIA	5
EL SALVADOR	EL SALVADOR. BALANCE PROVISORIO DE VEINTICINCO AÑOS DE PAZ.	6
GUATEMALA	MUJERES E INDÍGENAS: CINCO HISTORIAS DE DISCRIMINACIÓN EN GUATEMALA. CERCA DE UN CUARTO DE LA POBLACIÓN DE GUATEMALA ESTÁ FORMADA POR MUJERES INDÍGENAS, QUE SON VÍCTIMAS DE LA DISCRIMINACIÓN POR SU GÉNERO, ETNIA O ESTATUS SOCIAL.	8
HAITÍ	HENRY BOISROLIN: "HAY QUE MIRARSE EN EL ESPEJO HAITIANO PARA PENSAR LO QUE PODRÍA LLEGAR A PASARLES A OTROS PAÍSES LATINOAMERICANOS"	10
HONDURAS	INNOVADOR MODELO DE CRÉDITO RESCATA A AGRICULTORES HONDUREÑOS	12
MÉXICO	FAMILIAS DE DESAPARECIDOS RECORREN MÉXICO DESENTERRANDO FOSAS CLANDESTINAS	14
NICARAGUA	ESTUDIAN RESTAURAR ANTIGUA CATEDRAL	16
PANAMÁ	EL ESCÁNDALO ODEBRECHT REMECE LA TAMBALEANTE ESTRUCTURA PARTIDISTA	17
VENEZUELA	OPOSICION VENEZOLANA SIN SALIDA	18

AMÉRICA LATINA

DECLARACIÓN DE SANTO DOMINGO DEL ENCUENTRO DE MOVIMIENTOS SOCIALES Y FUERZAS POLÍTICAS "POR LA PAZ, LA UNIDAD Y LA INTEGRACIÓN DE NUESTRA AMÉRICA"

Con una declaración en la que se reivindica "la lucha común por la soberanía, la democracia, el desarrollo sostenible y la garantía de todos los derechos humanos para todos nuestros ciudadanos", culminó el Encuentro de Movimientos Sociales y Políticos que precedió a la reunión de la Cumbre de la CELAC. Este manifiesto de Santo Domingo, firmado por todas las organizaciones y personalidades del continente participantes, será entregado a los mandatarios de la CELAC.

Documento de Santo Domingo

Los movimientos sociales y las organizaciones políticas de América Latina y el Caribe, reunidos los días 23 y 24 de enero del 2017 en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, suscribimos el presente documento de ferviente apoyo a la V Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños –CELAC-, junto a la esperanza de que contribuya aún más a la consolidación y el fortalecimiento de ese importante mecanismo de concertación y acción mancomunada de nuestros países, en defensa de los intereses y derechos de las naciones y los pueblos.

La CELAC representa un rayo de esperanza para los países latinoamericanos y caribeños que debemos coordinar esfuerzos para juntos combatir los grandes males que nos aquejan, como son: la pobreza, el hambre, el desempleo, la falta de acceso a servicios de salud, educación y a viviendas dignas, la desigualdad de género y violencia contra las niñas y mujeres, la violación de los derechos más elementales, la guerra cultural y mediática, la inseguridad ciudadana, el flagelo de las drogas, las políticas neoliberales, las acciones ilegales y depredadoras de las empresas multinacionales, la destrucción del medio ambiente, el intercambio desigual y los obstáculos para una comunicación contra hegemónica, entre otros males.

Sumamos nuestro esfuerzo militante a la lucha común por la soberanía nacional, la democracia, el desarrollo sostenible y la garantía de todos los derechos humanos para todos nuestros ciudadanos. Esto se torna más indispensable cuando la ofensiva de la derecha en el continente y el reciente ascenso al poder del presidente estadounidense, aumenta el riesgo de que, junto a sus prédicas hegemonistas, misóginas, racistas, xenófobas e imperialistas, se multipliquen y ejecuten las amenazas de agresión características de la vieja política del gran garrote y el intervencionismo, que tantas tragedias han causado a nuestros pueblos a lo largo de la historia.

Denunciamos militantemente esas graves amenazas, llamamos a la alerta, la solidaridad más decidida y la unidad de nuestros pueblos, y reclamamos espacios de diálogo entre los gobiernos y los movimientos sociales para enfrentar esos y otros desafíos.

Respaldamos la Proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, como fuera acordado en 2014 por los Jefes de Estado y Gobierno en la Segunda Cumbre de la CELAC.

Rechazamos la implantación de bases militares por países y organizaciones ajenos a la región, la reactivación de la IV Flota, la implementación de un nuevo Plan Cóndor, los ejercicios militares conjuntos con potencias y organizaciones extranjeras, como la OTAN, y demandamos el retiro de la MINUSTAH de Haití, primer país en alzarse contra la dominación colonial y con el cual nos solidarizamos permanentemente.

Condenamos la criminalización de la protesta social y la persecución por grupos paramilitares contra gobiernos, organizaciones y líderes progresistas. En ese sentido, exigimos la libertad de la diputada Milagro Salas y del luchador político Simón Trinidad, y reclamamos justicia para el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Apoyamos la resistencia y la lucha de Puerto Rico por su independencia, aún ausente de la CELAC, y celebramos el indulto de Oscar López Rivera, fruto de la batalla de su pueblo y de la solidaridad internacional por su liberación.

Respaldamos firmemente la soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Nos unimos al reclamo mundial por el levantamiento inmediato e incondicional del bloqueo genocida contra la hermana República de Cuba por parte del Gobierno de los Estados Unidos y la devolución del territorio ocupado por la Base Naval de Guantánamo.

Expresamos nuestro apoyo incondicional a la Revolución Bolivariana y al legítimo gobierno liderado por el presidente Nicolás Maduro. Exigimos la derogación de la injerencista Orden Ejecutiva del Gobierno de los Estados Unidos que califica a Venezuela como una amenaza a su seguridad nacional.

Saludamos la reciente victoria electoral del Frente Sandinista en Nicaragua y la reelección del Presidente Daniel Ortega. Alertamos sobre el intento de socavar la estabilidad del gobierno de El Salvador.

Reclamamos la urgente necesidad de erradicar la pobreza, el hambre y la desigualdad social, para construir sociedades justas e inclusivas, que garanticen el acceso para todos a la salud, la educación pública, gratuita y de calidad, a una vivienda digna sin desalojos forzosos, el trabajo digno y el respeto a las conquistas y derechos laborales, el fomento de la cultura y la identidad, las oportunidades para los jóvenes y estudiantes, y la participación efectiva del pueblo. Nos solidarizamos con las luchas de los maestros y los estudiantes en toda la región, incluyendo las reformas educativas.

Apoyamos los esfuerzos del pueblo colombiano por alcanzar la paz con justicia social, luego de cinco décadas de cruenta guerra, en el marco de los acuerdos logrados entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, y del inicio del diálogo con el Ejército de Liberación de Nacional. La paz de Colombia es la paz del continente.

Nos guía la convicción inequívoca de que el más efectivo recurso es la unidad de las naciones y los pueblos, y en ese ánimo reiteramos nuestro compromiso militante de hacer cuantos esfuerzos sean precisos para poner esa fuerza popular en pie, y así formar una barrera infranqueable contra las pretensiones del imperialismo estadounidense y sus aliados. Avanzar hacia la conquista de nuestra definitiva liberación nacional y social, que desde la inmortalidad nos siguen señalando los guías y precursores de esa causa, nos anima a adoptar la presente Declaración y suscribrirla con el más alto espíritu de solidaridad latinoamericana y caribeña, con eterno compromiso al legado de los invictos Comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez e inspirados en la heroica resistencia de mujeres como Mamá Tingó, las Hermanas Mirabal y todos nuestros héroes y mártires de la Patria Grande.

Santo Domingo, 24 de enero de 2017

(Fuente: Resumen Latinoamericano)

BOLIVIA

EVO 2019, LAS BATALLAS PENDIENTES DEL PROCESO DE CAMBIO BOLIVIANO

La decisión está tomada. Evo Morales será el candidato del MAS y de los sectores populares en las elecciones presidenciales que tendrán lugar el último trimestre de 2019.

Para ello, el proceso de cambio tendrá que librar importantes batallas durante los dos años que faltan hasta que comience una campaña electoral que se adivina la más dura y despiadada de

cuantas han acontecido en Bolivia, incluida la que tuvo lugar para el referéndum del 21 de febrero de 2016.

La batalla del liderazgo

La repostulación de Evo (sea vía recolección de firmas para un nuevo referéndum o vía habilitación por renuncia como recientemente ha teorizado Héctor Arce, Procurador General del Estado) traerá un costo político necesario de asumir, pero costo al fin y al cabo, entre los sectores de clase media urbana que no apoyan a la oposición, pero sí manifiestan una posición muy crítica del gobierno nacional (que se ha manifestado en el apoyo al No en el referéndum, en el señalamiento al gobierno como responsable de la crisis del agua, o en su posicionamiento en contra de eventos como el Dakar). Esta oposición podría canalizarse mediante la postulación presidencial de Carlos Mesa, ex Vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Losada y ex Presidente entre octubre de 2003 y junio de 2005, de quien la frágil memoria de esas clases medias parece haber olvidado lo nefasto político que fue.

La batalla de la juventud

Junto a las clases medias, otra batalla a librar por el proceso de cambio boliviano es la de la juventud. Una amplia masa de votantes que en 2019 no habrá conocido el neoliberalismo. El MAS y el proceso en general tiene el deber de construir un proyecto que no interpele solo la mística posneoliberal, si no que atraiga a los sectores más jóvenes de este país, y un arma fundamental para disputar esta batalla es la cultura. No hay proceso, ni mucho menos revolución, que no venga acompañada de una política cultural. Construir revolución en el cine, teatro, música, es una tarea pendiente del proceso de cambio.

La batalla del sentido común

Y si hablamos de mística y cultura, el proceso necesita construir un nuevo sentido común de época, una nueva hegemonía que necesariamente tiene que ser posneoliberal y partir de interpelar al núcleo duro del proceso de cambio, yendo más allá, volviendo a incorporar sectores que se han ido alejando. Esta afirmación no pasa necesariamente por volver la mirada hacia las clases medias. Todo lo contrario, el núcleo y principal destinatario de las políticas públicas del proceso debe ser la mayoría social del país, el movimiento indígena originario campesino. La lección del referéndum del 21 de febrero, donde se bajaron algunas banderas (literalmente, se sustituyó el azul y negro del MAS por un naranja y verde) para no "asustar" a la clase media, debe servir para tener un horizonte claro. Solo a partir de ese núcleo duro es que se puede irradiar hacia otros sectores; empresariales, estudiantiles, etc.

La batalla de la gestión

Otra de las lecciones del referéndum por la repostulación de Evo Morales es que ya no es suficiente con hacer una buena gestión para contar con un amplio apoyo electoral. La buena gestión, que no es fruto de casualidades si no la causalidad de una serie de decisiones políticas, se da ya entre la población como un hecho y el listón está tan alto que cuando no se alcanza, se sufre el castigo electoral. Es por ello que en la fase que viene del proceso de cambio, la profundización y a ser posible radicalización del proceso se tiene que dar manteniendo desde las instituciones del Estado una gestión impecable.

La batalla económica

De manera complementaria a la gestión, es necesario continuar con el proceso de redistribución de la riqueza iniciado en 2006, pero con un salto hacia adelante que es el de la industrialización. La crisis económica que ha contraído una buena parte de las economías latinoamericanas no ha repercutido tanto en Bolivia gracias a las buenas decisiones tomadas, pero el crecimiento cercano al 5% (el más alto de Sudamérica) que se prevé para 2017 debe ser también la base sobre la que lanzar una ofensiva en favor de los sectores populares. Entre los pendientes, una reforma fiscal que impulse la progresividad.

La batalla mediática

Una de las batallas más importantes a enfrentar en los próximos 3 años es la mediática. La agresión mediática perpetrada en el referéndum del 21 de febrero apuntaba a erosionar el pilar sobre el que gravita el proceso de cambio, la figura y el liderazgo de Evo Morales. Es más que previsible que la confrontación mediática, amparada en mentiras y difamaciones en muchos casos por parte de los medios privados bolivianos, se intensifique en la medida en que nos vayamos acercando a 2019. Es en este terreno donde la derecha, nacional e internacional, con la ayuda del imperialismo estadounidense, lleva años de ventaja a las fuerzas populares. Es urgente construir trincheras mediáticas de la verdad frente a la ofensiva de la mentira, tanto desde los medios estatales como desde los medios comunitarios.

La batalla ética

La ofensiva mediática que vive no solo el proceso boliviano si no todos los procesos de cambio latinoamericanos y caribeños, pasa por la construcción de matrices mediáticas contra los principales liderazgos y logros de estos procesos. La principal matriz, probada en Argentina y Brasil especialmente, es la acusación de corrupción contra unos gobiernos mucho más transparentes que los del neoliberalismo. No hay más que ver cómo viven las y los ex ministros de Evo, y como viven los del neoliberalismo. Una forma de pasar a la contraofensiva es estableciendo una línea de defensa infranqueable de intolerancia absoluta contra cualquier forma de corrupción, dejando al enemigo sin un solo argumento que justifique la construcción de estas matrices.

La batalla territorial

Si bien serán importantes las batallas anteriores, la batalla final se dará sobre el territorio. Y en ese campo solo nos queda volver a Lenin. La tarea principal del proceso de cambio será el trabajo territorial con la gente, la formación política de una sociedad que se va despolitizando y a la que van despolitizando. Y para esta batalla se necesita reforzar el instrumento político, el MAS-IPSP que debe dar una vuelta de tuerca y pasar de ser una maquinaria electoral a una máquina de guerra electoral asentada sobre dos pilares fundamentales, el territorio y la gente, el pueblo.

(Fuente: Katu Arkonada / Resumen Latinoamericano)

COLOMBIA

17 LÍDERES SOCIALES FUERON ASESINADOS EN LOS DOS ÚLTIMOS MESES EN COLOMBIA

La Unidad estatal para las Víctimas del conflicto informó la cifra de muertes contadas desde el 1 de diciembre de 2016.

Un total de 17 líderes sociales fueron asesinados en Colombia desde el 1 de diciembre de 2016, informó este lunes el Gobierno del país suramericano, el cual atraviesa un momento histórico de transición hacia la paz.

"Ya son 17 los líderes sociales asesinados desde el pasado 1 de diciembre, fecha en la que el Congreso de Colombia refrendó el Acuerdo de Paz", indicó la Unidad estatal para las Víctimas en un comunicado.

Por su parte, el director de la Unidad para las Víctimas, Alan Jara, rechazó la muerte violenta del líder Porfirio Jaramillo y señaló: "Estamos sumamente preocupados por la ocurrencia de estos hechos, porque están masacrando a los líderes sociales, el trabajo de ellos es completamente legal".

Sobre la necesidad de los líderes sociales, Jara aseguró que "desde el Estado debemos brindarles protección para sus vidas".

El Acuerdo de Paz definitivo fue aprobado el primero de diciembre de 2016, con el consentimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC – EP) y el Gobierno de Juan Manuel Santos, para ponerle un punto final al conflicto armado en el país suramericano que tiene más de medio siglo de vigencia.

Fuente: AFP | Telesur

EL SALVADOR

EL SALVADOR. BALANCE PROVISORIO DE VEINTICINCO AÑOS DE PAZ.

El Salvador conmemora en estos días más de dos décadas de la firma de la paz: una gesta que todavía provoca esperanza en su pueblo y en las naciones del mundo que aún enfrentan conflictos armados. Sí, es cierto: la guerra se acabó. El Acuerdo de Chapultepec calló las armas e hizo posible la difícil, casi traumática, convivencia de dos proyectos políticos y dos visiones del mundo radicalmente distintas, pero la guerra continúa.

La paz se firmó hace ya 25 años, pero en las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla del FMLN hubo algo que permaneció al margen de toda discusión: el modelo económico fue el gran ausente en esas conversaciones. La correlación interna e internacional de fuerzas impidió que el FMLN pudiera instalar el tema en la agenda. Es decir que lo que creó —y crea- las condiciones para el conflicto y eventualmente la guerra, y lo que genera la injusticia y la opresión que la provoca, no estuvo presente en la mesa de negociaciones. Se firmó la paz sobre un trasfondo de conflicto que fue ignorado. Tal cosa, afortunadamente, no ocurrió en las conversaciones que tuvieron lugar en La Habana entre las FARC-EP y el gobierno colombiano.

Para colmo de males, hace poco más de diez años, El Salvador firmó su adhesión al Tratado Centroamericano de Libre Comercio (CAFTA, por su sigla en inglés) promovido por Estados Unidos. Lo hizo junto a los otros países de América Central (Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala) y la República Dominicana. Si su predecesor, el NAFTA firmado entre Estados Unidos, Canadá y México tuvo consecuencias económicas, políticas y sociales catastróficas en el país azteca, los resultados del CAFTA difícilmente podían ser mejores en el área centroamericana. Y no lo fueron. Un ejemplo: en El Salvador, en los diez años anteriores a la firma del acuerdo comercial las exportaciones crecían a un ritmo del 8 por ciento anual; luego de la entrada en vigor del tratado lo hicieron a casi la mitad. Claro que las importaciones procedentes de Estados Unidos aumentaron vertiginosamente precipitando una fuerte expansión del consumo en los estratos superiores de las capas medias (pero no en el resto de las clases populares) y desatando, como contrapartida, la misma debacle campesina que antes se produjera en México y que convirtiera a la tierra originaria del maíz en importador neto del transgénico norteamericano. A diez años de haberse puesto en vigor aquel tratado la principal vía de escape a la pobreza en El Salvador -que en el campo se empina alrededor del 60 por ciento de la población siendo un 40 por ciento para el total del país- sigue siendo la emigración. No hay prueba más contundente del fracaso del CAFTA que ésa. Pero si bien es relativamente sencillo en el marco del tratado exportar mercancías a Estados Unidos (siendo muchísimo más fácil importarlas desde ese allí), los salvadoreños tienen que arriesgar sus vidas para ingresar al país que los invitara a compartir las mieles del "libre cambio". Circulan sin restricciones las mercancías, no las personas. En la actualidad unos dos millones y medio de salvadoreños viven en Estados Unidos. Sin contar los que se encuentran en otros países (España, principalmente) se trata de una cifra que representa poco más del 40 por ciento de la población del país, estimada en unos 6.100.000 habitantes. La expulsión de esa masa migrante origina ingresos, por la vía de las remesas, del orden de los 4.200 millones de dólares, permitiendo que un millón trescientas mil personas puedan sobrevivir en el país a los rigores e inequidades de la globalización neoliberal. Téngase en cuenta que según datos oficiales el 87 por ciento de las personas en edad de jubilarse no cuenta con ningún tipo de pensión o ayuda previsional. Esas

remesas son esenciales para su supervivencia y representan el segundo ítem de ingreso de divisas, sólo superado por las exportaciones salvadoreñas.

Todo lo anterior habla con elocuencia de la fragilidad del país y de la estafa de los tratados de libre comercio. En noviembre del año 2000, el corrupto presidente Francisco Flores, de la muy derechista ARENA -el partido que cuenta entre sus fundadores al asesino de Monseñor Oscar Arnulfo Romero- promulgó la Ley de Integración Monetaria por la cual El Salvador adoptó el dólar y abandonaba definitivamente el colón, que había sido la moneda oficial desde 1892. Como consecuencia de ello el gobierno perdió un instrumento decisivo de manejo macroeconómico: la política monetaria. Esta circunstancia, unida a la importancia de las remesas procedentes de los salvadoreños en el exterior y los perniciosos efectos del CAFTA refuerzan la dependencia estructural de El Salvador en relación con Estados Unidos y coloca al gobierno en una situación de debilidad que no pudo ser superada por el FMLN. Con el dólar, las remesas y el CAFTA Washington maneja los resortes fundamentales de la economía del país centroamericano. Agréguese a lo anterior la importancia de El Salvador por su ubicación en el istmo centroamericano, lo que suscita la permanente atención del Pentágono dado que esa parte del mundo es vista por sus estrategas como una fuente de innumerables acechanzas y, por eso mismo, territorio preferencial (junto con el Caribe) para la instalación de un gran número de bases militares que, según algunos expertos, serían más de cincuenta.

Dados estos antecedentes, lo que ha hecho el gobierno del FMLN es mucho, pero se trata de una tarea titánica por todo lo que todavía es preciso hacer. Democratizó el proceso político y el acceso al gobierno. Pero las estructuras de los "poderes fácticos" permanecen inalteradas, el Poder Judicial enfrenta con saña las iniciativas del presidente Salvador Sánchez Cerén y otro tanto ocurre con el Congreso y la feroz oligarquía mediática. En suma: conquistas democráticas en un ámbito acotado de la vida pública y permanencia del despotismo oligárquico en todo lo demás. El Salvador es un país que a lo largo de su historia fue víctima de brutales represiones. En 1932 el líder comunista Farabundo Martí encabezó una rebelión popular que fue ahogada en sangre, y la violencia reaccionaria se desplegó durante gran parte del siglo. Matanzas campesinas sin pausa; fuerzas armadas entrando a la Universidad Nacional destrozando su biblioteca para luego arrasar lo que quedaba en pie con el avance de sus tangues; masacres de aldeas enteras; asesinato de los jesuitas de la Universidad Centroamericana y de Monseñor Romero mientras consagraba la eucaristía; escuadrones de la muerte torturando y asesinando por doquier con la bendición y la cobertura de Washington. Todo eso en el país más pequeño de América Latina -el "pulgarcito" como dijera el poeta Roque Dalton- que pese a ello demostró tener unas agallas increíbles y con la guerrilla del FMLN lograr un éxito militar que casi no tiene parangón a nivel internacional: contener la campaña de exterminio lanzada por el ejército salvadoreño bajo la conducción efectiva y descarada de oficiales estadounidenses y así forzar un acuerdo de paz, que hubiera sido imposible si la querrilla hubiera sido derrotada. Sólo porque esa guerra terminó en un empate -en realidad, una derrota para el Pentágono- es que fue posible llegar a un acuerdo de paz. Importante, aunque insuficiente. Pero el salvadoreño es un pueblo que no se arredra ante las derrotas y sigue luchando. Estamos seguros que más pronto que tarde recogerá los frutos de su heroísmo en la medida en que este combate no se circunscriba al ámbito económico y político e incluya también, como uno de sus principales teatros de operaciones, la "batalla de ideas" a los cuales Fidel nos convocara hace ya muchos años. Porque sin prevalecer en este crucial terreno, sin ganar el combate en el campo de las ideas y la conciencia, todas las demás conquistas pueden desbaratarse como un castillo de arena. Por suerte son cada vez más quienes en El Salvador sostienen esta convicción. Serán las "trincheras de ideas" martianas que frustrarán los designios estadounidenses de convertir a ese país en una gigantesca base de operaciones de contra-insurgencia para, desde allí, aplastar los procesos progresistas y de izquierda que se agitan por toda la región.

(Fuente: Atilio A. Boron, Resumen Latinoamericano)

GUATEMALA

MUJERES E INDÍGENAS: CINCO HISTORIAS DE DISCRIMINACIÓN EN GUATEMALA. CERCA DE UN CUARTO DE LA POBLACIÓN DE GUATEMALA ESTÁ FORMADA POR MUJERES INDÍGENAS, QUE SON VÍCTIMAS DE LA DISCRIMINACIÓN POR SU GÉNERO, ETNIA O ESTATUS SOCIAL.

Guatemala es un país de contrastes: sus climas fríos en las montañas y cálidos en el sur, el corredor seco en el oriente y sus frondosos bosques en el altiplano, la riqueza en ciertas zonas de la capital y la pobreza extrema en la gran mayoría de zonas rurales, el estatus de superioridad del ladino y las enormes dificultades que afronta el pueblo maya... La condición como hombre y la cláusula como mujer.

Guatemala es el segundo país del mundo con mayor porcentaje de población indígena, sólo por detrás de Bolivia. Ladinos e indígenas están llamados a convivir en un país cuya población apenas supera los 16 millones de personas de los cuales más del 41% son de alguna etnia indígena y casi más de un cuarto de la población son mujeres indígenas.

El país centroamericano está formado por cuatro pueblos diferentes con identidad y cultura propias. Mayas, Garífunas, Xincas y Ladinos constituyen la riqueza cultural de un país que todavía no ha sabido canalizar este patrimonio. El resultado directo ha sido la desigualdad y la pobreza, en particular de la mujer indígena.

Entre las faldas del Volcán de Atitlán y el Volcán San Pedro, se encuentra la aldea de Chuk - muk, un pequeño municipio construido para dotar de refugio a las víctimas de la tormenta tropical *Stan* en el año 2005. Las lluvias torrenciales sepultaron por completo la aldea conocida como Panabaj dejando más de 200 muertos y casi un millar de familias afectadas. Es el caso de Mariela Mujún Sac, quien hace ocho años se trasladó al municipio para empezar una vida desde cero tras la pérdida de catorce miembros de su familia. Mariela cuenta con el apoyo de la Fundación Familia Maya para hacer frente a la pobreza. Fue a raíz de la tormenta que esta ONG abrió su sede en Panajachel y comenzó a ayudar a las personas afectadas por las inundaciones y deslaves de tierra. Desde hace más de diez años apoya a familias y mujeres indígenas a través de programas de desarrollo y ayuda humanitaria.

Con 40 años, Mariela vive en una humilde casa al final del pueblo, tiene cinco hijos y sólo trabaja dos o tres días a la semana en los que hace unos 100 quetzales semanales (13 dólares americanos). Mariela es analfabeta, no sabe español y sufre problemas de salud que remedia con el uso de plantas medicinales de tradición maya. Lleva más de 20 años casada con su esposo y cuenta cómo ha sido víctima de violencia de género y continuas agresiones por parte de su marido.

"Durante años me pegaba si participaba en reuniones con otras mujeres para hablar sobre nuestros derechos". "En una ocasión, estaba discutiendo con mi marido cuando de repente me arrojó una taza de café ardiendo. No me permitía salir a trabajar y me pegaba a menudo, tampoco quería que nuestras hijas estudiaran. No podía más y decidí poner una denuncia ante una organización de derechos humanos. Después las cosas cambiaron a mejor en la casa y aún seguimos casados", relata Mariela con la voz entrecortada.

La mentalidad del marido de Mariela es la de muchos hombres dentro de la sociedad indígena en Guatemala. En las áreas rurales, la tendencia es que las mujeres no deben ir a la escuela o trabajar de manera independiente, su deber reside en el cuidado del hogar y de los hijos. Mariela no pudo divorciarse de su esposo por la falta de sustento económico y por miedo a las críticas por parte de otras mujeres de su comunidad que le recriminarían "no haber sido suficiente mujer para cuidar de su marido y de su familia", dice.

La pobreza lleva el sello indígena y la mujer es la más afectada

En Guatemala, el 79% de los indígenas y el 76% de la población rural son pobres según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. Las mujeres indígenas son las más afectadas

por el rechazo, las diferencias económicas y salariales y la discriminación racial. No sólo se ven afectadas por los índices más bajos de bienestar económico y social, sino que además no tienen otra alternativa que lidiar con una sociedad machista dominada ampliamente por el patriarcado.

Nicolasa tiene 34 años y es indígena, perteneciente a la etnia Kaqchikel, la segunda más extendida en el país. Vive en Peñablanca, en las montañas altas del Departamento de Sololá, una de las comunidades con mayor índice de pobreza y malnutrinición del país. Nicolasa es madre de cuatro hijos y está embarazada del quinto. Trabaja como tejedora en una comunidad con recursos muy limitados, donde la agricultura y la costura son las únicas vías de relativo escape a la pobreza. Nicolasa nunca pasó de tercero de primaria, quiso seguir estudiando pero su padre y su madre no lo consideraron oportuno por su condición y *responsabilidades* como mujer.

Una de sus hijas sufre una disfunción al hablar y necesita asistencia médica. Hace un año, tuvo que viajar de urgencia a la Ciudad de Guatemala en busca de tratamiento. El médico la recibió en uno de los hospitales públicos y al constatar su procedencia indígena, su traje típico y su escaso español, la aisló y le negó tratamiento y medicinas.

Vidas paralelas, historias que se cruzan

Las mujeres indígenas guatemaltecas tienen, casi todas, una historia en común. Muchas comenzaron a trabajar palmeando tortillas a los diez años y no fueron a la escuela por el estigma social o porque se quedaron embarazadas a edades muy tempranas. Muchas otras fueron rechazadas en entrevistas laborales por ser mujeres e indígenas. Otras fueron víctimas de maltrato o violencia machista.

Elvira Pérez sabe lo que es la lucha. También es indígena, tiene 35 años y es activista de los derechos de la mujer indígena a consecuencia de la discriminación que vivió en el pasado. Vive en el pequeño pueblo de San Antonio Palopó, en la cuenca del Lago Atitlán. En esta comunidad, a las mujeres indígenas se las identifica por su traje típico de azules oscuros y sus rasgos aborígenes. "Durante mi etapa en un colegio de Quetzaltenango, uno de mis compañeros ladino me insultó llamándome 'india'. Me dijo que no tenía derecho a jugar y a bailar con el resto de la clase", relata Elvira.

Años más tarde, Elvira empezó a trabajar en un hotel cuyo dueño era un ladino conocido de San Antonio. "Cuando comenzaron los problemas en la administración del hotel, fui acusada, junto a otras compañeras indígenas, de ser las culpables de la mala gestión administrativa del hotel. Todo aquello era porque éramos indígenas". Elvira se defendió, había recopilado durante seis años toda la documentación relativa a las finanzas y pudo probar su inocencia y la de sus compañeras acusadas. Más adelante, todas comenzaron a recibir amenazas de hombres del pueblo por ayudar a otras mujeres a denunciar casos de violencia o discriminación.

El traje típico, seña de identidad del pueblo maya, y el analfabetismo son los dos grandes factores que convierten a las mujeres indígenas en víctimas del racismo y la marginalización. La barrera del idioma y la falta de acceso a un sistema de justicia que las proteja las hacen vulnerables a la exclusión social. Todo ello sumado a que los índices de escolaridad son sumamente inferiores entre la población indígena guatemalteca y de nuevo las mujeres están a la cabeza.

Las heridas abiertas del genocidio guatemalteco

El genocidio contra las poblaciones mayas dejó una herida abierta aún por cicatrizar y es aún historia viva entre los hombres y mujeres de Guatemala. A finales del año 1996, el Gobierno de Guatemala y el grupo de partidos guerrilleros que conformaban la URNG (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca) firmaron los Acuerdos de Paz, poniendo fin a 36 años de conflicto. El conflicto interno dejó al menos 250.000 víctimas mortales, de las cuales el 93% fueron indígenas asesinados a manos del ejército según Naciones Unidas.

María Vicenta, 64 años, trabajaba desde los diez años en las plantaciones de café cerca de las costas del Océano Pacífico. Cuando empezó el conflicto se quedó viuda y dos de sus tíos fueron

asesinados acusados por sus vecinos de pertenecer a la guerrilla en su cantón. Ella y su familia se trasladaron a la Ciudad de Guatemala para huir de la limpieza étnica de indígenas en las zonas rurales.

"A las seis de la tarde, nadie debía salir a la calle. El ejército buscaba a los guerrilleros por las casas para matarlos, lo mejor era esconderse. Por la mañana salíamos a trabajar y veíamos los cuerpos de los indígenas tirados en la calle", relata. Tres años después de mudarse a la capital, regresaron al campo en Sololá para trabajar en la agricultura y el cultivo de maíz aún con el conflicto armado activo. "Fue complicado, no podíamos salir a las fincas por miedo a los soldados. Durante días, mi familia y yo nos manteníamos en la casa y sobrevivíamos comiendo tortillas con sal, o a veces ni comíamos", cuenta Vicenta. Años más tarde, se quedó ciega y ahora depende de los cuidados de su hija para comer y vivir en su casa.

A tres manzanas de su casa, en el pueblo de San Jorge de la Laguna, vive su vecina. María tiene 74 años, también es víctima afectada por el conflicto. Sobrevivió a un asalto del ejército en su casa y perdió a su cuñado en uno de los registros nocturnos en el municipio de Chichicastenango, el cual dejó a su hermana viuda. "Mi cuñado dormía en el monte junto a otros compañeros para evitar ser arrestado en las batidas del ejército, una noche, nunca volvió".

Mariela, Nicolasa, Vicenta, María y Elvira son la voz de las mujeres indígenas y guatemaltecas que anhelan justicia y un futuro mejor. La realidad presente es que las mujeres indígenas guatemaltecas han sido y son discriminadas o conocen a alguna amiga, familiar o vecina que lo ha sido. Sus testimonios ponen de relieve las injusticias y abusos que miles de mujeres y madres indígenas guatemaltecas afrontan para salir de la pobreza extrema y para ver sus derechos reconocidos y protegidos. Sin embargo, y a pesar de las dificultades por su condición, todas afirman sentirse orgullosas de ser mujeres e indígenas.

(Fuente: Juan Haro. Resumen Latinoamericano)

<u>HAITÍ</u>

HENRY BOISROLIN: "HAY QUE MIRARSE EN EL ESPEJO HAITIANO PARA PENSAR LO QUE PODRÍA LLEGAR A PASARLES A OTROS PAÍSES LATINOAMERICANOS"

Entrevista a Henry Boisrolin del Comité Democrático Haitiano (CDH)

M.H.: El 12 de enero de 2010 fue una fecha trágica para tu país. Han pasado 7 años y por lo que se puede observar en las cifras de la economía haitiana del año pasado, en cuanto a la depreciación de la moneda, un país que depende en un 80% de las importaciones, la inflación, etc., no parece haber mejorado la situación durante este tiempo transcurrido.

H.B.: Evidentemente se trata de un proceso que no es casual, los resultados que estás contando no vienen del cielo. Además, hay que agregar algo mucho más importante que todos esos datos que es la extrema pobreza que afecta a la inmensa mayoría del pueblo haitiano. Es cada vez mayor el sector que ha caído en la indigencia. Es producto de un proceso muy avanzado de neocolonización del país, que no empezó ayer, sino hace bastante tiempo y que ha pasado por distintas etapas. Y eso, a pesar de la resistencia y las luchas populares. Hasta ahora el campo popular haitiano no supo o no pudo revertir esta situación. También el aislamiento en el cual se encuentra, sobre todo en el concierto latinoamericano, salvo en algunas ocasiones y algunas personas, de manera institucional el pueblo haitiano es considerado como un paria.

Después de 12 años de la ocupación del país por la Minustah, la Misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, sigue siendo supuestamente humanitaria pero, sin embargo, han reconocido su responsabilidad en la epidemia del cólera que mató a más de 10.000 haitianos,

hay 800.000 personas infectadas y eso no ha conmovido a ningún gobierno latinoamericano, a excepción de Cuba y Venezuela.

Es tremendo, porque dejando de lado las acusaciones de abusos y violaciones, estamos en presencia de un acto donde hay 10.000 personas muertas y ellos lo reconocen y es como si nada. Es un escándalo. Entonces, cuando se plantean estas realidades como la depreciación de la moneda haitiana, son cosas reales pero que son árboles que tapan el bosque y a veces no nos dejan ver bien cuáles son las causas reales de lo que está sucediendo.

M.H.: Está por asumir un nuevo presidente en Haití. ¿Esto genera alguna expectativa tendiente a la resolución de esta situación que señalas?

H.B.: Yo creo una vez más, que en caso de que llegara a asumir Jovenel Moïse, no es producto de una elección democrática, soberana y honesta. Ha sido una farsa, donde ellos designaron a alguien, la oligarquía haitiana, la llamada Comunidad internacional han designado a alguien para seguir con el plan de entrega, donde los cipayos ocupan las primeras plazas en las administraciones públicas, en instituciones totalmente corruptas y débiles para seguir entregando lo poco o mucho que nos queda. Entonces, no pueden existir expectativas. Tal es así que en todo el proceso electoral el propio Consejo Electoral reconoció que solo votó el 21%, lo que significa que hay un 79% del electorado que no fue a votar. Un padrón que vo cuestiono permanentemente, porque no hay ninguna instancia del Estado haitiano dedicado a confirmar la cantidad que somos, porque no hay censo. Entonces, ¿de qué padrón electoral se habla? Hubo un terremoto hace 10 años que nos costó 300.000 muertos, después de esto no hubo depuración del padrón electoral, y hubo elecciones en 2010/2011. Ahora hubo un huracán que arrasó, dicen que hubo 500 muertos, pero además miles y miles de personas que ellos mismos reconocieron que perdieron su documentación, y para votar es necesario el documento. De esas miles y miles, solamente 2.000 fueron a buscar su documento. Supongamos que fuera realmente una elección sin fraude, que no es así, pero supongamos, el Presidente tiene menos de 600.000 votos sobre un padrón de 6.200.000 electores. Lo que significa en términos democráticos que este hombre va a tener legalidad pero no va a tener legitimidad. Y es tal, que el día que dieron los resultados preliminares y el día que dieron los finales, no hubo júbilo de gente saliendo a la calle a festejar como ocurre en cualquier lugar, solamente se reunió en un hotel de lujo con sus amigos y habló.

Son situaciones muy lamentables y yo trato de insertar esto en el proceso de neocolonización, porque hay que mirarse en el espejo haitiano para pensar en lo que podría llegar a pasarles a otros si tienen éxito en Haití.

Hasta ahora no podemos hacer grandes pronósticos porque estamos en un momento de decantación, hay gente que deja de oponerse a Jovenel, pero los tres candidatos de peso que le siguen no reconocen el resultado. Cómo van a reconocer el resultado cuando no respetaron la verificación que habían pedido, como el decreto electoral disponía, entonces no pueden aceptar un resultado así.

La Unidad de control financiero en Haití dio un informe en 2012 planteando que este hombre elegido presidente ha cometido el crimen de lavado de dinero. Nadie ha aclarado absolutamente nada. Ahora vuelve a aparecer el tema. Mañana el director de esa institución va a dar una conferencia de prensa, porque él presentó toda la documentación para que se tomen cartas en el asunto. Hoy hay 4 Senadores de la República que piden el esclarecimiento de esto, han escrito una carta abierta al Presidente del Senado para que antes de que asuma, el presidente electo dé explicaciones de qué ha pasado, porque hasta que un tribunal no condene a alguien, le tenemos que dar a esa persona el beneficio de la inocencia. Pero él tiene que aclararlo. Entonces, un presidente que va a asumir con tantas dudas, qué expectativas puede tener el pueblo.

El presidente, supuestamente electo, está en República Dominicana desde ayer y los haitianos nos hemos enterado de eso a partir de la prensa dominicana, ni siquiera informaron al país que él se iba sabiendo muy bien los enormes y dolorosos problemas que hay entre los dos países con el tema de la migración, con la expulsión de haitianos por el Decreto 68/13. Hace dos semanas

una familia entera fue asesinada en República Dominicana a golpes. Y este hombre va a República Dominicana.

No hay ninguna expectativa, sobre todo cuando sabemos que es la oligarquía haitiana, los sectores adinerados del país, el imperialismo norteamericano, la Comunidad Internacional, Francia, Canadá, etc., quienes han apoyado ciegamente a este señor desde las elecciones abortadas de 2015, quien después del huracán Matthew, haciendo abuso de poderes económicos, llevó arroz, materiales para los techos que se habían volado, poniendo su foto detrás de cada paquete, que tenía a su disposición helicópteros para ir a distintos lugares, a los que no tuvo acceso nadie más. ¿De dónde provino este dinero? Evidentemente de los sectores adinerados que lo apoyan.

Él va a tener que dar respuesta a ellos, porque no han invertido su plata para que él venga a solucionar los problemas de la gente. Desde la caída de la dictadura en 1986, el movimiento popular ha tratado, con sus errores, limitaciones y aciertos, de luchar por una mayor justicia, una mejor distribución, ahora están tratando de romper la espina dorsal de esto y tratando de formar en Haití una especie de fuerza de ultraderecha capaz de, supuestamente, ganar elecciones y eso es falso, porque cuando ellos dicen que es el nuevo líder se refieren a alguien que es el líder del 21% del padrón nada más. Cuando Aristide surgió en 1990 sí participó una cantidad enorme de gente y ahí nadie dudó de su victoria.

Entonces, yo no tengo ninguna expectativa. Sólo sé que los problemas van en aumento y los de la gente no van a tener solución, va a haber enfrentamientos. A mí no me gusta hacer futurología en política, solamente trato de ir paso a paso y ver realmente, porque en una situación tan compleja, dolorosa y difícil, sería irresponsable de mi parte tratar de proyectar o anunciar grandes cosas. Incluso tengo que reconocer que yo pensaba que después del anuncio de la victoria de Jovenel iba a haber una respuesta inmediata en la calle. No hubo tal respuesta. Estamos estudiando por qué. Cuando la haya van a reprimir fuertemente y puede ser una de las razones, porque no se puede dar pelea cuando te están esperando. También hubo traiciones, hay varias cosas que están ocurriendo en Haití que hacen más difícil poder hacer un análisis con sentido de proyección, lo único que sí me animo a decir es que el pueblo no puede esperar alguna solución de parte del gobierno. Incluso, el otro día detuvieron a un senador electo aliado de ellos, que hizo campaña con Jovenel Moïse en distintas instancias, Guy Philipe, sobre quien pesaba una orden de captura de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), lo detuvieron y lo humillaron y el presidente electo no dijo absolutamente nada, ni siguiera mandó una carta pidiendo explicaciones al gobierno actual o a la embajada de EE. UU., no pidió ni por la liberación de su amigo. Es un cobarde.

(Fuente: Mario Hernandez / Resumen Latinoamericano)

<u>HONDURAS</u>

INNOVADOR MODELO DE CRÉDITO RESCATA A AGRICULTORES HONDUREÑOS

En esta aldea del sur de Honduras, en una de las zonas deprimidas del país, el acceso al crédito es escaso, la banca no apoya a la agricultura y la naturaleza castiga con constantes sequías extremas. Pero desde hace dos años, otra historia empieza a forjarse.

Pero desde hace dos años, otra historia empieza a ser forjada desde Paso Real, una aldea de unas 60 familias con un total de poco más de 500 personas, en el municipio de San Antonio de Flores, a 72 kilómetros de Tequcigalpa.

Aquí un grupo de agricultores familiares de un poco más de 100 personas se cansó de tocar las puertas de la banca para un crédito blando y apostó por un nuevo modelo de financiamiento que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) decidió experimentar en este país centroamericano.

La iniciativa se conoce como centros financieros de desarrollo (CFD) y de momento se aplica solo en dos regiones deprimidas de Honduras: en Lempira, en el occidente del país, y en la Mancomunidad de Municipios del Norte de Choluteca (Manorcho), al sur.

Ambas zonas forman parte del llamado corredor seco de Honduras, que conforman al menos 12 de los 18 departamentos del país, afectados por el impacto del cambio climático.

Paso Real es parte de Manorcho, conformada por su municipio y otros tres –Pespire, San Isidro y San José-, que engloban una población de algo más de 53.000 habitantes del norte del departamento de Choluteca, en un área donde la población sobrevive de la agricultura y ganadería de subsistencia.

Rafael Núñez, es uno de los líderes de Grupo Ideal, una empresa productora asociativa que ha incorporado a la agricultura familiar el componente del cultivo y comercialización de la tilapia, un pez de agua dulce muy popular para el consumo en América Central. También cuentan con cría de ganado y siembra de hortalizas.

Núñez está contento de lo que han logrado. Si bien su familia ya poseía algunas tierras, "de nada nos servía porque nadie nos daba créditos".

"Venían los bancos y evaluaban la propiedad, pero ofrecían una miseria de préstamos a intereses asfixiantes. Nunca nos dieron crédito y eso que tocábamos muchas puertas", explicó Núñez a IPS.

"Pero ahora, no los ocupamos, hemos tenido acceso a créditos en el Centro Financiero de Desarrollo de la Manorcho a intereses blandos", añadió sonriente.

En su relato, Núñez dijo que como los bancos no les prestaban, tuvieron que hacer uso de las tarjetas de crédito o dinero plástico a tasas de interés de 84 por ciento anual, lo que les tenía ahogados, mientras que ahora los préstamos que obtienen en el CFD son accesibles y a una tasa de interés de 15 por ciento anual.

"No ha sido fácil levantarnos porque aquí la banca no cree en la agricultura, menos en la agricultura familiar. Yo colecciono las libretas de banco que usted ve y un día las voy enmarcar e iré a esos bancos a decirles: gracias pero ya no los necesitamos, nos levantamos con opciones más dignas que nos han brindado gente e instituciones que creen en nosotros", dijo con orgullo Núñez.

El productor compartió sus vivencias en el marco de un encuentro centroamericano promovido por la FAO para que representantes de organizaciones relacionadas con la agricultura familiar y del gobierno conocieran estas experiencias innovadoras que se promueven en el corredor seco hondureño.

Núñez mostró a los participantes en el encuentro las instalaciones de producción de tilapia que tienen en las aguas de la represa de usos múltiples José Cecilio del Valle, ubicada en el pueblo.

El Grupo Ideal es netamente familiar y cada uno de los hermanos, 11 en total, se dividen las labores y ofrecen trabajo directo al menos a 40 personas de la zona y en forma indirecta a poco más de 75. Ellos están convencidos en que su esfuerzo puede ser imitado por otros pequeños agricultores.

Dentro de sus satisfacciones, Núñez relata que han empezado a mejorar la dieta nutricional de la zona.

"Nosotros comemos con los trabajadores, trabajamos hombro a hombro con ellos y antes a la hora del almuerzo solo traían arroz, frijoles y espaguetis (pasta), ahora ya traen pollo, carne, tilapia y hasta camarón", aseguró.

Como requisito para trabajar en el grupo, sus empleados deben enviar a sus hijos a la escuela. "Este es un proyecto integral y queremos crecer con la aldea porque aquí casi no hay fuentes de empleo", acotó.

Marvin Moreno, el especialista de FAO que impulsa estos dos centros financieros experimentales, dijo a IPS que actualmente con este modelo se ha permitido a las pequeñas familias organizarse para acceder a oportunidades que les permitan salir de la pobreza.

En el CFD participan los gobiernos locales, las organizaciones de desarrollo que trabajan en la zona y grupos de mujeres, jóvenes y agricultores entre otros, a los que se da prioridad en los créditos.

El modelo tiene dos características: la solidaridad y la inclusión. Es solidario porque si alguien obtiene un crédito, todos se vuelven avales para garantizar el pago del préstamo, y es incluyente porque no discrimina.

"La prioridad son familias pobres en condición de subsistencia, pero también tenemos familias con más recursos, pero que igual tienen limitaciones al crédito", detalló Moreno.

"Es cuestión de dar una oportunidad a la gente y aquí estamos demostrando como el acceso al crédito está cambiando vidas y desde esa perspectiva debe verse como un derecho a ser contemplado en las políticas públicas de un país", agregó.

Esa visión es compartida por Abel Lara, un pequeño agricultor salvadoreño que tras conocer la experiencia dijo a IPS que esta "bolsa común de recursos donde se agrupan varios esfuerzos para poner a disposición el crédito solo viene a comprobar que desde los territorios y su realidad es posible levantar la agricultura familiar".

Los dos CFD instalados por la FAO en Honduras han logrado movilizar cerca de 300.000 dólares mediante una alianza público-privada, entre la comunidad, organizaciones y gobiernos locales.

Ello ha permitido algo más de 800 pequeños productores accedan a créditos que por ahora van desde 150 a 3.000 dólares, con plazos de amortización de entre 12 y 36 meses.

En el caso de la Manorcho, César Núñez, alcalde de San Antonio de Flores, aseguró a IPS que "la gente está empezando a creer que el centro financiero es una opción real de cambio y aquí todos apostamos a sacar adelante estos municipios pobres, golpeados por la naturaleza pero con potencial para salir adelante".

En un país de 8,4 millones de habitantes, donde 66,5 por ciento vive en condiciones de pobreza, el acceso al crédito como incentivo a la agricultura familiar puede cambiar las perspectivas de vida a unas 800.000 familias que a lo largo del corredor seco viven en condiciones deprimidas.

Estas experiencias, según la representante de la FAO en Honduras, María Julia Cárdenas, serán parte de las propuestas de diálogo regional que impulsará el Consejo Agropecuario Centroamericano para colocar en la agenda regional el desarrollo de la agricultura familiar.

Fuente: Thelma Mejía en http://www.ipsnoticias.net/

MÉXICO

FAMILIAS DE DESAPARECIDOS RECORREN MÉXICO DESENTERRANDO FOSAS CLANDESTINAS

Tiene 8 años y busca a su hermana menor, Zoe Zuleica Torres Gómez, desaparecida en diciembre de 2015, cuando tenía 5 años, en el nororiental estado de San Luis Potosí. Juan de Dios es el buscador de fosas clandestinas más joven de México.

Con pico y pala, se unió a la Tercera Brigada Nacional de Búsquedas de Desaparecidos, que el lunes 30 encontró los restos de un cadáver en una fosa oculta en un campo agrícola de maíz y sorgo del ejido de Potrero de Sataya, en el municipio de Navolato, en el noroccidental estado de Sinaloa.

Se trata del segundo hallazgo de esta brigada, formada por un puñado de mujeres y hombres, que buscan entre la tierra pistas de sus hijos, hermanos y padres desaparecidos durante los años de la llamada guerra contra el narcotráfico, acompañados de algunos activistas defensores de derechos humanos y sacerdotes católicos.

"Un problema que no es reconocido no puede ser resuelto, y tampoco puede tener sanación", dijo Juan Carlos Trujillo Herrera, el impulsor de las brigadas, a IPS, que ha acompañado su trabajo en Sinaloa.

"Todos los ministerios públicos (fiscales) del país están saturados con este tema, no hay una estructura que nos permita pensar que la institucionalidad va a funcionar. Por eso hemos tenido que salir nosotros a buscar a nuestros familiares", insistió Trujillo, quien busca a cuatro hermanos desaparecidos.

Al llegar a la presidencia en diciembre de 2006, el derechista Felipe Calderón (2006-2012) militarizó la seguridad del país para combatir a las mafias del tráfico ilegal de drogas y lanzó a México a una espiral de violencia de la que no puede salir.

Un dato dimensiona la gravedad del problema: antes de ese año, el gobierno mexicano identificaba a siete grandes carteles del narcotráfico.

Diez años después, hay cerca de 200 grupos criminales operando en el país, según la información dada a conocer este mes por el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica (Cide).

La información del Cide, una de las instituciones educativas más prestigiosas del país, registra también por lo menos 68 masacres en ese tiempo.

En 10 años, la llamada guerra contra el narco emprendida por Calderón ha dejado más de 177.000 personas asesinadas, de ellas 73.500 durante la gestión de su sucesor, el también conservador Enrique Peña Nieto.

También ha tenido un saldo de al menos 30.000 personas desaparecidas, aunque los registros sobre desapariciones varían mucho entre distintas autoridades y organizaciones de la sociedad civil.

En 2011, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabezó el poeta Javier Sicilia puso en la agenda nacional el tema de las desapariciones, al evidenciar cientos de casos en todo este país de 122 millones de habitantes.

Pero fue en octubre de 2014, con la desaparición forzada de 43 estudiantes de magisterio rural en Ayotzinapa, en el suroccidental estado de Guerrero, y en enero de 2016, cuando cinco jóvenes fueron detenidos y desaparecidos por policías estadales en Tierra Blanca, en el estado de Veracruz, que el país supo que muchas de las desapariciones atribuidas al crimen organizado eran, en realidad, desapariciones dirigidas por las autoridades.

"Por eso no los buscaban", dijo Miguel Trujillo, hermano menor de Juan Carlos. Desde entonces, en el país se han multiplicado grupos de familiares que, desesperados por la ausencia del Estado, comenzaron sus propias búsquedas.

Para ello se preparan: toman cursos de antropología forense, de arqueología, de derecho; compran equipo de espeleología, consiguen bateas para encontrar huesos pequeños, organizan cuadrillas y se han convertido en expertos en identificar fosas y huesos.

Las primeras brigadas se organizaron en marzo de 2016 en Veracruz, un estado del oriente mexicano donde se han descubierto varios cementerios clandestinos y donde en hasta ahora se han ubicado 160 restos.

Ahora, en el país hay entre 13 y 15 grupos de búsquedas. Y desde el 24 de enero salieron a campo distintos grupos en Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa, a donde llegaron brigadistas de cinco estados, para una búsqueda colectiva de 12 días.

"Son dos lógicas distintas de búsquedas, en vida y en búsqueda en muerte. Creo que eso es lo que nos está fallando porque también tenemos que buscar a los vivos, pero es que esto nadie lo estaba haciendo", dijo Juan Carlos Trujillo.

Los colectivos son apoyados por organizaciones de la sociedad civil, como la brigada de Paz Marabunta, un colectivo de jóvenes de Ciudad de México que forma el equipo de seguridad de las familias.

"Es muy difícil tratar estas realidades con los jóvenes, que no se desilusionen de la humanidad, pero el acompañamiento les das esperanza. Porque cuando se dan cuenta de que pudieron ayudar se construye esperanza y ellos se reafirman como constructores de paz", dijo a IPS el director de Marabunta, Miguel Barrera.

Sinaloa es la tierra del cartel que creó el poderoso jefe del narcotráfico Joaquín Guzmán Loera, conocido como "El Capo" Guzmán, extraditado el 19 de este mes a Estados Unidos.

La brigada ha tenido dos hallazgos: el del Potrero Sataya y uno más en el municipio de El Quelite, a 10 kilómetros del puerto de Mazatlán. Hasta aquí llegó con su madre el niño de San Luis Potosí, para ayudar en la localización de restos.

"Es algo que tenemos que hacer porque el Estado no lo está haciendo y no lo iba a hacer nunca", dijo Mario Vergara, quien inició el grupo de Los Otros Desaparecidos de Iguala, el municipio donde fueron desaparecidos los estudiantes de Ayotzinapa, y ahora ayuda a brigadistas de todo el país.

"Estamos avanzando en la organización y vamos a seguir. Los que se quedan en cada estado van a saber coordinarse para hacer mejores búsquedas; necesitamos replicar el modelo en cada estado y comprometer a los gobiernos para que ayuden a los grupos de búsqueda", explicó Miguel Trujillo.

Fuente: Daniela Pastrana en http://www.ipsnoticias.net/

NICARAGUA

ESTUDIAN RESTAURAR ANTIGUA CATEDRAL

El Gobierno central anunció que se realizarán estudios para posiblemente reconstruir la antigua Catedral Metropolitana de Santiago, como parte de los trabajos que se realizan en el casco histórico de Managua.

La vicepresidenta Rosario Murillo destacó que la Alcaldía de Managua estará presentando a una comisión integrada por arquitectos e ingenieros italianos y mexicanos para estudiar la posibilidad de reconstruir este monumento histórico.

"Primero se realizarán los estudios, para luego hacer el presupuesto y gestionar el financiamiento a través de cooperación internacional", dijo Murillo, señalando que la Catedral Metropolitana de Santiago, ubicada a un costado del Palacio de la Cultura, es un patrimonio cultural e histórico de Nicaragua.

Murillo indicó que ese edificio recuerda la vida en Nicaragua antes del terremoto de 1972 y cómo después cambió todo. Varios acontecimientos históricos se dieron en la catedral o en sus inmediaciones. Entre estos tenemos un responso para el padre de la dinastía Somoza (Somoza García), muerto en un atentado por Rigoberto López Pérez, la toma del Palacio Nacional, la celebración del triunfo de la Revolución de 1979, entre otros.

Por su parte, el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, declaró que posterior al terremoto del 72, la vieja catedral de Managua ha tenido propuestas de reconstrucción con apoyo de la cooperación internacional, que todavía no concluyen y en lo cual se debe seguir trabajando.

"Uno de los esfuerzos en los que seguimos trabajando es estudiar opciones de mantenimiento y reconstrucción de la vieja catedral. Por años hemos estado haciendo esfuerzos y tenemos iniciativas no concluidas, en las que todavía tenemos que seguir trabajando", dijo el secretario municipal capitalino.

Moreno señaló que éste es un esfuerzo del Gobierno central como parte de la reconstrucción del centro histórico de la ciudad de Managua.

"Hemos desarrollado obras en el casco histórico de la ciudad, La catedral requiere un esfuerzo nuestro que hemos estado trabajando y Dios mediante poder hacer una propuesta concreta pronto", alegó Moreno.

Destacó que en materia de ingeniería el proyecto es riesgoso y caro, por lo que buscan opciones más seguras y accesibles a la capacidad del Gobierno.

"Tiene un daño estructural muy importante y reparar la estructura, sin afectarla ni alterarla, es un tema de ingeniería complejo de resolver. Algunas propuestas hechas alteran sustancialmente el edifico original", indicó el funcionario municipal.

En la misma zona, ya se desarrollan las obras de restauración del Palacio de la Cultura. La inversión es de C\$8 millones y se destinan para la impermeabilización del techo, pintura y eliminar los agregados, para quitarle peso a la estructura y dejarla con su aspecto original histórico, inaugurado en 1941.

Fuente: http://www.elnuevodiario.com.ni/

PANAMÁ

EL ESCÁNDALO ODEBRECHT REMECE LA TAMBALEANTE ESTRUCTURA PARTIDISTA

Recién destapado el escándalo de las 'coimas' pagadas por Odebrecht a funcionarios panameños, el Movimiento Independiente por la Refundación Nacional (MIREN), exigió una explicación prolija y completa por parte del actual gobierno presidido por Juan Carlos Varela. Ha pasado un mes y las autoridades nacionales siguen tapando los hechos. Apenas se inicia una investigación poco transparente, no se han establecido contactos firmes con otros países afectados y las obras que realiza Odebrecht en el país continúan sin el menor cuestionamiento.

La actitud gubernamental y su brazo fiscalizador tienen que ser mucho más agresivo. La marcha organizada por las redes que vigilan los desmanes de los partidos políticos tuvo como lema central el alto a la corrupción. Todo indica que la corrupción –parte integral de las acciones partidistas del país– se ha apoderado de todos los resquicios del gobierno y empresas privadas.

A fines del año pasado, cuando el Departamento de Tesoro de EEUU dio a conocer que un informante de Odebrecht indicó que esa empresa brasileña había pagado coimas por un total de 800 millones de dólares -59 millones correspondientes a Panamá - , el MIREN señaló que no debía pedírsele a Odebrecht que "acepte su culpabilidad". El MIREN planteó que los "cómplices en los actos de soborno deben ser procesados penalmente por sus actuaciones".

También exigió que Odebrecht suspenda sus actividades en Panamá para ser sometido a una investigación y juicio. Esto implica que "el gobierno intervenga al Grupo Odebrecht y asegure que

todas las obras que inició y se encuentran en construcción cumplan a cabalidad con los términos pactados".

El gobierno calcula mal si piensa que el escándalo pasará y podrá seguir como si nada ocurriera. El país está preparado para exigir cuentas hasta las últimas consecuencias. A la vez, el caso Odebrecht tiene tentáculos internacionales. Es muy probable que termine arrasando con el gobierno brasileño, desestabilice otros gobiernos de la región y que EEUU continúe utilizando a Odebrecht como herramienta para crear zozobra. Es oportuno que el presidente Varela saque todos los 'trapos sucios' y destape lo ocurrido en tres gobiernos: los de Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y el actual.

Los escándalos de Odebrecht en Panamá no son recientes. Cuando llegó al país, de la mano del entonces presidente Martín Torrijos, un obrero de la construcción fue muerto por sicarios aparentemente al servicio de la constructora brasileña. El obrero Osvaldo Lorenzo fue asesinado por disparo de arma de fuego en un altercado en una construcción que adelantaba Odebrecht en las inmediaciones de la ciudad de Colón. El gobierno y Odebrecht intentaron culpar a dirigentes del SUNTRACS por el asesinato, según La Estrella de Panamá. Posteriormente, fueron detenidos los supuestos responsables del homicidio.

Desde esa primera experiencia de Odebrecht en el país han pasado muchas otras. En total, el grupo constructor brasileño se ha ganado 10 licitaciones por un total de 9 mil millones de dólares en casi 10 años. Desde las dos líneas del Metro, carreteras, hasta la Cinta Costera y otras obras. El gobierno norteamericano dice que su informante denunció que entre 2010 y 2014 los brasileños le hicieron pagos ilegales a funcionarios panameños por un total de 59 millones de dólares.

Esta suma es cuestionable. Un análisis del modus operandi de Odebrecht arrojaría como resultado que cada obra representaría una coima cercana del 10 por ciento de su costo. Es decir, en Panamá se habrían repartido un total de 900 millones de dólares en coimas. A la Procuraduría panameña le corresponde investigar a fondo estas irregularidades. Sin embargo, hay indicios de que se tratará de minimizar estas pesquisas por el impacto político que tendrían.

El escándalo Odebrecht se produjo cuando la Asamblea de Diputados iniciaba un debate sobre las reformas electorales. Precisamente, sobre el financiamiento público de los partidos políticos y sus candidatos a elección popular. Los políticos pretenden recibir de las arcas fiscales un monto superior a los 500 millones de dólares para el torneo electoral de 2019. Sumado a las donaciones privadas (que no tendrían límites) y las contribuciones de dinero 'sucio', las elecciones próximas prometen ser las más caras y violentas de la historia.

El MIREN asegura que le ofrecerá una alternativa al pueblo panameño en 2019 para poner fin a la corrupción sin control y, a la vez, presentará un plan de desarrollo nacional que erradique la inseguridad y genere empleos decentes para todos los panameños.

Fuente: Marco A. Gandásegui, hijo, en http://www.alainet.org/

VENEZUELA

OPOSICION VENEZOLANA SIN SALIDA

El patético fracaso de la marcha del 23E lleva a preguntarse qué rumbo tomará quien se haga con los restos de la MUD. ¿O acaso nadie lo hará y la disgregación actual será irreversible? Cuatro ínfimas marchas reemplazaron la movilización de masas pretendida por las fracciones opositoras. División y debilidad extremas mostradas a los ojos de bases antichavistas más que desmovilizadas, desmoralizadas.

Más elocuente aún es el contraste de la flaqueza opositora con dos respuestas masivas al llamado del gobierno: las maniobras cívico-militares denominadas Ejercicio de Acción Integral Antimperialista Zamora 200, el 14 de enero, y el fervoroso acompañamiento de los restos de Fabricio Ojeda para ser sepultados en el Panteón. Fabricio Ojeda fue líder revolucionario del derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez en 1958. Precisamente el hito histórico que la oposición intentó sin suerte apropiarse este 23E.

Como testimonio inocultable de esa suma demasiado prolongada de fracasos golpistas está el presidente Nicolás Maduro. En su cargo, en gradual resolución de los gravísimos problemas que azotaron a Venezuela. Todos los límites puestos por la oposición desde abril de 2013 fueron cayendo uno tras otro.

Algunos de los nombres más reconocidos de la oposición parecen resueltos a huir hacia delante, pese a que ya no son reconocidos como dirigentes. Y es claro que colocar a la Asamblea Nacional (AN) al margen y en contra de la institucionalidad, a la vez que se rechaza la mesa de negociación, indicaría la opción por la vía insurreccional y el doble poder. Otros vacilan y un tercer bloque se opone a declarar una guerra que, a la luz de los hechos, evalúan imposible de ganar.

Los primeros tienen una única expectativa para llevar adelante sus planes: ellos toman la iniciativa, disuelven la AN o la colocan frontalmente como poder alternativo, y luego llegan los mercenarios pagados, armados y conducidos por la Casa Blanca. Los demás, sencillamente se dan por derrotados. Basta escuchar sus lamentos para comprobarlo.

Cuando la MUD ganó la mayoría en la AN, en diciembre de 2015, hubo un intento de las fuerzas revolucionarias por afirmar un Poder Legislativo alternativo dentro mismo de la AN, a través de un Parlamento Comunal, que debía funcionar en el antiguo recinto del Senado. No prosperó. Ahora toca a la oposición abroquelarse en la única instancia institucional que domina y desde allí intentar romper el marco constitucional tras el objetivo de derrocar a Maduro. Fuerzas todavía poderosas (entre ellas la jerarquía eclesiástica local y ciertos burgueses) atisban esa salida. Pero son precisamente las que hasta el momento se muestran irresueltas, vacilantes, a la espera de que una voz más potente les confirme desde Washington que pueden dar el salto.

No obstante, la imponente prueba de unidad de la Fuerza Armada, el Gobierno, el Psuv y la masa popular el 14 de enero, tiene la capacidad de disuadir no sólo a la escuálida contrarrevolución interna. En todo el hemisferio se tomó nota del informe –corroborado por la prensa mundial– dado por el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, quien señaló que "participaron 76 mil efectivos de la Fanb, 102 mil milicianos y 400 mil hombres y mujeres del pueblo organizado. En total se movilizaron 578.230 personas entre profesionales de la Fuerza Armada, milicianos y movimientos sociales".

Sin conducción ni orientación, la MUD se fragmentó también respecto de la participación en la mesa de diálogo, auspiciada por Unasur, el Vaticano y franjas de la socialdemocracia internacional. Portales opositores publican decenas de pronunciamientos furiosamente contrarios a cualquier negociación. De su lado el Gobierno ratifica esa línea de acción, calificada como trampa, traición y capitulación por sus oponentes.

Puede parecer paradojal: incapaz de ganar la calle o utilizar la AN como ariete eficiente contra la estabilidad de Maduro, la mayoría de las tendencias componentes de la MUD rechazan el diálogo. A la inversa, con toda la fuerza material de su lado, el Gobierno se muestra dispuesto a hacer concesiones. Pero en esa misma contradicción reside el meollo de la situación venezolana: largamente hegemónica en la sociedad, pese a las inmensas dificultades que afronta, la Revolución Bolivariana necesita de la paz y la concordia para continuar desarrollándose e intentar cortar los lazos que la asfixian. A la inversa, atrapada en un callejón sin salida la oposición sólo puede justificarse en medio del caos. Por eso lo ha fomentado de manera organizada y sistemática, aun al costo de provocar escasez, carestía y zozobra que afectan a millones de ciudadanos.

Esto lo ha comprendido el grueso de la sociedad, incluso en franjas opositoras o partidarias de la Revolución igualmente indignadas con las autoridades por efecto de la retracción económica, la inflación, la inseguridad y la corrupción. En el vaciamiento de la MUD se expresa la conciencia de que su dirigencia apostó al caos y la desesperación de las mayorías, sin excluir perjuicios graves para sus propios partidarios.

Hay, por tanto, una tendencia objetiva a la continuidad de la mesa de negociación y otra, igualmente enraizada en poderosos intereses, que empuja hacia su disolución. Mientras estos últimos no tengan la fuerza suficiente para reemplazar esa instancia dialoguista por otra de efectiva colisión frontal con el Gobierno, el paréntesis no se cerrará y habrá espacio para resolver los problemas de la producción y distribución de bienes, para ordenar el sistema financiero e incluso para tomar medidas drásticas contra especuladores, saboteadores y corruptos que traban el funcionamiento de la economía, incluso ahora que el precio del petróleo aumentó significativamente.

De paso: ese alza en el precio de la materia prima esencial para la economía mundial resultó de una bien planificada y mejor aplicada intervención de Maduro y su gobierno en el seno de los países productores de petróleo, dentro y fuera de la Opep.

Así las cosas, en Venezuela están restablecidas las bases para continuar en la ardua transición hacia el socialismo. Esto replantea, desde luego, el debate sobre las medidas concretas de esa transición. Y el Psuv tiene acaso en este punto su mayor desafío, ahora que ha recuperado capacidad de movilización masiva y orientación efectiva del activo militante propio y del conjunto de fuerzas aliadas. Por la misma razón, la oposición se embarca en un intento desesperado por romper la institucionalidad desvirtuando al extremo las funciones de la AN y apelando a toda forma de violencia a su alcance.

Fuente: Luis Bilbao en http://americaxxi.com.ve/